

Parte I
Democracia y gobernabilidad



Eduardo Ballón E.

Caroline Gibu

Jaime Llosa

Carlos Monge

León Portocarrero

Bruno Revesz

Claudia Viale

El final del primer tiempo del gobierno

Eduardo Ballón E.

Presentación

El nombramiento de Yehude Simon como Primer Ministro del Perú a partir del 10 de octubre del 2008, causó más de una sorpresa, no tanto por la iniciativa del Presidente García, cuanto por la aceptación del líder lambayecano. La capacidad del primero de desconcertar, especialmente a sus propios correligionarios, es parte consustancial de su manera de entender y hacer la política, como lo demostró cotidianamente desde su primer gobierno. La aceptación y el entusiasmo del segundo, resultaban explicables por una combinación de ambición electoral y candor que le permitieron durar sin mayores sobresaltos, manteniendo a lo largo de los meses, una imagen relativamente positiva que se ubicaba incluso por encima de aquella que registraba el gobierno como conjunto, demostrando el acierto presidencial.

Recordemos que el ex presidente regional accedió al premiato en medio de la mayor crisis que afrontaba el gobierno desde su instalación. Asediado por la corrupción que desnudaban los petroaudios que empezaban a circular – que demostraban la plena vigencia del modelo “principal-agente”, en el que los actores públicos actúan contra el Estado y a favor de un agente privado, que

es quien establece las normas y los procedimientos a seguir¹ — , afectado por una inflación que ya entonces empezaba a asomar sus narices, recordando un pasado que evidentemente incomoda al mandatario y afligido por el incremento de la conflictividad social y de diversas protestas, que evidenciaban las incapacidades del Estado y de los operadores políticos del gobierno, García enfrentaba un escenario particularmente difícil ante la inminente reunión del APEC, sin duda una de las vitrinas internacionales que le interesaban más.

El gabinete Del Castillo había sido uno de los de mayor duración desde la caída de Fujimori, no obstante, sus errores políticos y ostensibles deficiencias, si no indicios claros de corrupción en algunos sectores, que se resolvieron con la salida discreta de algunos ministros puntuales. El ingreso de Simon le dio al Ejecutivo un balón de oxígeno indispensable en ese momento y simultáneamente pudo dar la imagen de un gabinete nuevo (seis de dieciséis), sin afectar su núcleo central y golpeando, “sin querer queriendo”, las eventuales aspiraciones de Del Castillo y sus buenas relaciones con el mundo empresarial². El nuevo Premier, por su parte, sabía seguramente desde el primer momento, que su capacidad se limitaba a la posibilidad de algunos golpes de timón que no afectaran las grandes rutas en los grandes temas nacionales.

De allí que en su presentación en el Congreso de la República, el 8 de noviembre, se limitara a hacer demostración de su buena disposición y voluntad, y concentrara su intervención en materia de corrupción, anunciando la formulación de un Plan Nacional Anticorrupción, que finalmente terminó siendo retórica y ruido. Desde el primer momento, Simon se esforzó por tratar de diferenciarse del rol “bomberil” cumplido por su antecesor, a pesar

¹ Ugarteche, Oscar. *Adiós Estado: Bienvenido Mercado*. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos-Fundación Friedrich Ebert, 2004.

² Ballón, Eduardo. «Sorpresas nos da la vida, la vida nos da sorpresas....». En: *Quehacer*, n° 172, Lima, octubre-diciembre 2008.

de que su gabinete inició su gestión desactivando el conflicto del sector salud y abordando, aunque con grandes dificultades, las paralizaciones de Sicuani y Tacna. Paradójicamente, el incierto futuro del Premier y todo su gabinete, hoy día parece soldado a su tardío descubrimiento de la importancia de dicho rol. Amenazado por la interpelación y la más difícil pero eventual censura a su gabinete, que tiene como centro su responsabilidad en el conflicto con la población indígena amazónica y la execrable muerte de 34 personas, el líder chiclayano, como todo el país, debe estarse preguntando hasta dónde alcanzará el “blindaje” que le puede prestar el partido de gobierno. Ello, en medio de una crisis bastante mayor que la que le permitiera acceder al premierato y que supone el inicio del segundo tiempo del gobierno actual.

El final del primer tiempo gubernamental

Parece claro que el primer tiempo del segundo gobierno de Alan García, ha llegado a su final. El agotamiento del modelo económico, la conflictividad social (cada vez más justificada por la opinión pública), la corrupción (aunque parcialmente silenciada) que se ha evidenciado y las tensiones que empiezan a notarse en la alianza en el poder, así lo indican.

El ciclo de crecimiento que mostró la economía por más de 90 meses concluyó; en el primer trimestre del año, las exportaciones tradicionales y no tradicionales se contrajeron en 35% y 21% respectivamente; la tasa de empleo adecuado en Lima Metropolitana cayó en -2.2% y la tasa de subempleo creció en 1.6%³; sólo entre julio y septiembre del 2008 se perdieron 83,000

³ Ortiz, Humberto. «Análisis económico y social». *Coyuntura, Análisis Económico y Social de Actualidad*, Año 5, No.24. Lima: Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2009.

empleos industriales⁴, mientras que los cálculos más optimistas prevén que los ingresos tributarios del 2009 alcanzarán el 14.9% del Producto Bruto Interno (PBI), frente al 15.4% del 2007; además, la inflación del 2008 llegó al 6.65%, afectando especialmente a los pobres y a los salarios que perdieron capacidad adquisitiva. Ni el monotemático discurso presidencial sobre el “blindaje” de la economía peruana frente a la crisis global, ni los anuncios del Ministro de Economía sobre el fondo que habría tocado aquella, han logrado disimular la gravedad de una situación que como hemos visto, ya muestra sus efectos, los que probablemente se agravarán en los próximos meses.

El Plan Anticrisis del Gobierno, que debió obligar a García y a los empresarios a replantearse el rol del Estado en la economía – tan denigrado y simplificado en sus discursos y en el apuro con el que promulgaron el aluvión legislativo (102 decretos, orientados a cerrar y concluir la reforma neoliberal), justificado en el marco del TLC con Estados Unidos y sin ningún tipo de consulta previa –, no se basa en un diagnóstico integral de ésta, ni parte de un consenso construido con otras fuerzas políticas o con las autoridades regionales y locales, limitándose a intentar reforzar el modelo, protegiendo al gran capital, priorizando grandes inversiones y formas de asociación público privada, centrándose en el sector urbano (vivienda y microempresa) y obviando al mundo rural.

La conflictividad social, por su parte, se viene incrementando significativamente desde el 2008, en un escenario en el que se profundizan distintos rasgos del conflicto: se ratifica la pérdida de todo liderazgo del Ejecutivo en la prevención y negociación de los conflictos sociales; se afirma una cultura de confrontación como único mecanismo de negociación que entiende el gobierno; la prolongación de los procesos de negociación y la fragilidad de los acuerdos que se construyen, alienta la radicalidad, pero también la fragmentación

⁴ Encuesta Permanente del INEI, citada en «¿Blindados?... Para Nada». *Bajo la Lupa*, Año 2, n° 10. Lima: noviembre 2008, pp. 13.

de las organizaciones y simultáneamente, se fortalece, en alguna medida, la capacidad de presión de algunos gremios nacionales⁵.

En el último año, se agravó la reiterativa trayectoria de los conflictos sociales en el país, que muestra que frecuentemente son las propias políticas del Estado las que originan un importante porcentaje de estos, más aún, cuando tales decisiones se toman a espaldas de los involucrados y de la ciudadanía toda, como ocurriera con los 102 decretos legislativos antes mencionados, varios de los cuales afectan a los pueblos amazónicos, que no fueron consultados a pesar de la obligación del Estado en esa materia al ser firmante del convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, cuya movilización y lucha ha sido la más importante y significativa de los últimos años, a despecho de la limitada atención que le dieran el gobierno y los medios de comunicación hasta su condenable desenlace⁶.

Mientras los conflictos se multiplican en todo el territorio nacional⁷ —el año 2008, los conflictos activos se incrementaron significativamente sobre los latentes, 134 y 63, respectivamente⁸, tendencia que se aceleró este año alcanzando en mayo, 212 conflictos activos y 56 latentes⁹—, la Unidad de Análisis y Prevención de Conflictos Sociales de la Presidencia del Consejo de Ministros

⁵ Sobre el particular ver: Caballero, Víctor. *El rayo que no cesa. Conflicto y Conflictividad Social 2009*. Lima: Servicios Educativos Rurales-Entraide et Fraternite, 2009. Ver también: Remy, María Isabel. «Poca participación y muchos conflictos». En: **desco**, ed. *Perú hoy. Por aquí compañeros. Aprismo y neoliberalismo*. Lima: **desco**, 2008.

⁶ Sobre dicho conflicto ver: Monge, Carlos; Portocarrero, León; y Viale, Claudia. *La democracia peruana agoniza en la Curva del Diablo*, publicado en este mismo volumen.

⁷ El Reporte de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo al 31 de mayo del 2009, registra conflictos en todos los departamentos del país, salvo Ucayali y Tumbes. En 9 de ellos, se identifican más de 11 conflictos en cada uno.

⁸ *Reportes Mensuales de Conflictos Sociales*. Lima: Unidad de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, 2008.

⁹ Adjuntía para la Previsión de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad. *Reporte de Conflictos Sociales*, n° 63. Lima: Defensoría del Pueblo, mayo del 2009.

y otras instancias sectoriales orientadas al mismo fin, evidencian sistemáticamente su precariedad y obligan al Primer Ministro al tardío rol “bomberil” que recusaba: más de 50 días tarde en el caso de los pueblos indígenas amazónicos, después de 12 días del bloqueo de las vías y la movilización permanente en Andahuaylas y otro tanto en Sicuani, cuyas demandas y protestas ya eran visibles desde el segundo semestre del año pasado.

A estas alturas, los ya manidos argumentos de la presencia de “agitadores antisistémicos”, la presencia de “grupos extremistas”, la acción de ONG o la existencia de una “conspiración internacional”, levantados por el gobierno y sus principales aliados políticos, pero también por distintos medios de comunicación, no logran disimular la responsabilidad estatal y la incompetencia de sus unidades de resolución de conflictos, pero se hacen más peligrosos, por su alto contenido político ideológico autoritario. Así, un sondeo de opinión pública reciente, muestra que el 57% de encuestados entiende que las comunidades nativas tenían razón en su protesta, frente al 18% que se la asigna al gobierno; por si caben dudas, 57% considera que la responsabilidad de las muertes en ese conflicto es del Presidente, el 39% de la Ministra del Interior y el 24% de Yehude Simon, frente a sólo el 17% que sindicó como responsable a un dirigente indígena¹⁰.

El tercer elemento que marca el fin del primer tiempo del gobierno, es el que tiene que ver con la corrupción. Si bien el caso de los petroaudios ha sido colocado en la “congeladora” del Poder Judicial y los medios de comunicación dejaron de prestarle mayor atención, es innegable que no se quiere profundizar en las investigaciones sobre el mismo. Demasiados negocios mencionados — el gas, la construcción de hospitales, la adquisición de patrulleros —, muchos nombres importantes del régimen mentados, la presencia de marinos que han tenido vinculación con el trabajo de inteligencia,

¹⁰ IPSOS Apoyo Opinión y Mercado. *Opinión Data*, Año 9, n° 113. Lima: 22 de junio del 2009.

la vinculación de alguno de ellos con el Vicepresidente y el afán descalificador del propio Alan García con los “chuponeados” y con los periodistas que investigaban estos hechos, constituyen indicios sobrados de que se estaba tocando un nervio importante de un régimen, que apareció como más interesado en que se silencien, que en su esclarecimiento¹¹, y en la inevitable comparación con el fujimorismo.

Finalmente, el cuarto elemento que hay que consignar está relacionado con la incapacidad de gestión del aparato estatal y con la falta de operadores políticos del partido de gobierno. La soberbia materializada en el discurso del “perro del hortelano” no puede esconder que el gobierno aprista, desde un primer momento, regresó a la economía neoliberal extrema y ultraliberal del fujimorismo. Su fundamentalismo sobre la puesta en valor de los recursos económicos del país para su explotación mediante las grandes inversiones, la anatemización de los opositores a ese proceso — divididos entre agitadores e ignorantes —, y la función del rol estatal, reducida a promover y facilitar su implementación, ha bloqueado toda posibilidad de reformar el Estado, si no en términos de su relación con la sociedad, por lo menos a nivel de la efectividad de su intervención.

La incapacidad mostrada por el gobierno central en el gasto público — no llegó al 70% de los recursos presupuestados el 2008 — es apenas un indicador. La lentitud con la que se ejecuta la inversión pública, que se encuentra frecuentemente a la base de diversos conflictos sociales, ha llegado incluso a incomodar a distintos sectores empresariales, que encuentran en ella un elemento que afecta sus intereses y que explica parte del descontento social que también constatan. La ausencia de operadores políticos

¹¹ Sobre el particular ver el incisivo artículo de Grompone, Romeo. «De las afirmaciones enfáticas al desconcierto: el gobierno enfrentado a su propia imagen». En: *Argumentos* (Revista Virtual), Año 3, n° 1. Lima: Instituto de Estudios Peruanos (IEP), marzo del 2009.

del APRA, sin embargo, se expresa, más allá de la administración del Estado, en el propio funcionamiento de un Poder Legislativo anodino y sin iniciativa frente al Poder Ejecutivo, tanto como en los conflictos internos de la agrupación de Alfonso Ugarte, que parecen agotarse en la disputa por las futuras ubicaciones políticas de sus principales líderes pensando en el 2011¹², cuanto en la elección de su nueva dirección nacional, proceso en el que las pocas voces más o menos disidentes, son excluidas de manera claramente autoritaria¹³.

Los dilemas del segundo tiempo que se nos viene

De lo dicho hasta acá, creemos que se ha agotado el primer tiempo del gobierno aprista. La opinión pública, que tanto le preocupa al Presidente de la República, que ya venía cambiando en los últimos meses afectada por los luctuosos sucesos de Bagua, lo ha castigado severamente. Así, la aceptación de su gestión cayó entre mayo y junio del 30% al 21%; la del gobierno como conjunto, lo hizo del 28% al 19%; la de Simon, descendió del 35% al 25% y la del Congreso, pasó de un magro 16% al 11%¹⁴. Esa misma encuesta que citamos, registraba en junio que el 70% creía que el gobierno debía dialogar en Andahuaylas y que el 53% aprobaba la derogatoria del decreto ley 1069.

¹² Recordemos el tiempo y el esfuerzo invertido en tratar de lograr que los actuales parlamentarios puedan postular a cargos regionales o el intento más reciente de normar prohibiendo la reelección de los alcaldes en ejercicio.

¹³ Luis Alberto Salgado, ex secretario del Consejo Nacional de Derechos Humanos y candidato a la Secretaría General, fue expulsado en un proceso calificado de "sumarísimo", es decir, sin derecho a defensa ni explicación alguna, acusado de declarar a la prensa que el gobierno había sido el responsable de los hechos de Bagua, por haber señalado que el decreto legislativo 1069 era inconstitucional y no había sido consultado.

¹⁴ IPSOS Apoyo Opinión y Mercado. *Opinión Data*, Año 9, n° 113. Lima: 22 de junio del 2009.

Una encuesta anterior¹⁵ indicaba que el 42% consideraba que la economía privada de mercado, era la única forma para lograr el desarrollo, cuando dos años atrás, ese porcentaje se ubicaba cerca del 60%. Lo que tratamos de sostener es que se empieza a observar un cambio en las percepciones y valoraciones de la opinión pública sobre el modelo económico, pero también sobre el manejo político del país. Es cierto que el enfrentamiento de Bagua y su altísimo costo influyen fuertemente en esa dirección, pero no es menos cierto que la sensación del fin del ciclo de crecimiento económico y la falta de disposición de la alianza gubernamental para el diálogo con posiciones distintas a la suya, juegan un papel importante en esa dirección.

En cualquier caso, más allá de las miradas de la opinión pública que registran las encuestas, es claro que el modelo económico está, por lo menos, en un momento de importante inestabilidad e incertidumbre sobre la viabilidad del crecimiento por la expansión de exportaciones en el futuro, como lo señala certeramente Humberto Campodónico en un artículo reciente¹⁶. A la crisis internacional, la caída de precios y las crecientes restricciones en la demanda, cuyo horizonte de recuperación es de difícil pronóstico, se añade la cuestión de recursos no renovables que se agotan y tienen que renovarse, en un escenario en el que la protesta social bloqueó ya las intervenciones en Tambogrande, Majaz, Cerro Quilish y distintos lotes petroleros, afectando las expectativas de los inversionistas, pero también, los ingresos futuros del país, cuya estructura tributaria es fuertemente dependiente de las industrias extractivas.

De allí el apuro del gobierno por aprobar buena parte de los 102 decretos legislativos en el aluvión del 2008, dejando en claro

¹⁵ Instituto de Opinión Pública. *Estado de la Opinión Pública*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, mayo del 2009.

¹⁶ Campodónico, Humberto. «Cristal de Mira: Agotamiento, inestabilidad e incertidumbre». En: *La República*. Lima, 5 de junio del 2009.

su decisión de ampliar y defender el modelo de cualquier cambio. En esos términos, y en el escenario de hoy, sólo les queda la fe en que la crisis económica global sea pasajera y que se reactive la producción en los países industrializados y en China, de forma tal, que se genere una nueva demanda por exportaciones que nos permita retomar el camino del crecimiento. Si bien, no creemos aún en el agotamiento del modelo, nos parece que este está ya en el límite de su sostenibilidad, la que obliga a pensar, entre otras cosas, en el papel que debe cumplir el Estado en la economía, que no puede reducirse, como hasta ahora, a un rol subsidiario de la actividad empresarial.

La protesta social, por su parte, previsiblemente se multiplicará. La cantidad de conflictos activos y la complejidad de estos, hacen inviable la estrategia puntual de “apagar incendios” una vez que estos se desatan. El mecanismo de las mesas de diálogo resulta poco útil cuando las demandas de la población son múltiples y extensas, lo que hace difícil, si no imposible, su atención cabal desde los equipos específicos que constituye el Ejecutivo para cada caso, por lo que los acuerdos finalmente no son tales y alimentan nuevos conflictos por su incumplimiento¹⁷.

En general, la prolongación de los conflictos en el tiempo, pero también el aislamiento de muchos de ellos, contribuyen a generar violencia, lo que configuraría hacia adelante un escenario más difícil y peligroso. El éxito parcial del hasta ahora Premier Simon en los casos de Bagua y Andahuaylas, no debe llevar a error en esta materia, donde es claro que se requiere desde el Estado una política para una nueva relación con la sociedad, priorizando dentro de ella, a los pueblos indígenas y a las poblaciones rurales en general, reconociendo que el 50% de los conflictos actuales (123), son socioambientales y que 99 de ellos involucran a poblaciones pobres y extremadamente pobres, lo que indica mucho de su

¹⁷ Caballero, Víctor. *El rayo que no cesa. Conflicto y Conflictividad Social 2009*. Lima: Servicios Educativos Rurales-Entraide et Fraternite, 2009.

naturaleza. Complementariamente, como lo evidenciaron una vez más los conflictos recientes, es claro que no se pueden elaborar y aplicar políticas estatales, sin considerar las reacciones posibles de las poblaciones involucradas.

Vistas las cosas desde la sociedad, aunque ello no es tema de este artículo, es evidente que las protestas recientes, independientemente de su radicalidad y cobertura, y reconociendo la trascendencia y el significado de la movilización indígena, evidencian los severos problemas de representación política de vastos sectores de la población, que no encuentran formas de mediación y articulación de su relación con el Estado y el sistema político. La presencia de los partidos y de los distintos movimientos políticos en los conflictos recientes, como en la mayoría de ellos, es marginal y se limita antes al apoyo discursivo que a la conducción, lo que ha contribuido hasta ahora a la indolencia del Estado y ha escondido la incapacidad del partido de gobierno.

Es claro, sin embargo, que este escenario no puede prolongarse indefinidamente. Más allá de la figura de Simon y de su suerte, es evidente que a la alianza gobernante se le plantean distintas opciones. El gobierno, más precisamente el Presidente, ha logrado rearticular a la derecha peruana, mal que bien golpeada tras la caída de Fujimori. Dicha alianza que se sostiene en la continuidad del modelo económico y en la necesidad de derrotar totalmente, si no destruir, a los distintos sectores que son tildados de “anti-sistema”, se basa en última instancia en el pacto autoritario que se inició con el fujimorismo¹⁸.

En la coyuntura actual, importantes sectores de esa alianza están por el endurecimiento del régimen, la judicialización y penalización de la protesta y la crítica, la represión de la movilización

¹⁸ Esta idea es de Alberto Adrián, quien sostiene desde hace varios años que el fujimorismo fue consecuencia de la crisis económica y de la violencia política — que amenazaban la reproducción de las clases dominantes —, antes que resultado de la crisis de los partidos políticos.

social en nombre de la recuperación del orden público, el control privado sobre el Estado y la protección de la gran inversión y la propiedad. El fujimorismo, distintos grupos empresariales¹⁹, pero también diversos e importantes voceros del partido de gobierno, parecen interesados en este curso, que creen que es el que les garantiza llegar al 2011 preparados para permanecer en el gobierno.

Los segundos, también grupos empresariales y sectores del APRA, diera la impresión que minoritarios, defienden el modelo económico, pero presionados por sus limitadas bases sociales e interesados en la gobernabilidad, creen necesario flexibilizarlo y construir una relación menos cerrada y confrontacional con la sociedad, y no comparten la idea de una democracia censitaria que predomina entre los anteriores.

Finalmente, el tercer sector, el más pequeño, entiende que la crisis actual es resultado de la inoperatividad y los límites del APRA, que se resiste a cumplir cabalmente con las reformas de segunda y tercera generación que el Estado requeriría. La ineficiencia de éste y su burocracia, serían la explicación última del momento actual y explicarían, e incluso justificarían, el descontento de la población, al que se añaden la acción de grupos "antisistema" y distintas fuerzas internacionales.

Desde la sociedad, el tema de fondo empieza a dibujarse con mayor nitidez. De lo que se trata es de construir una democracia fuerte que sea capaz de terminar con el pacto autoritario, encauzando los conflictos que se harán más fuertes cuando se pretenda cambiar el modelo económico. El desafío es mayor, porque en ese proceso, la sociedad debe encontrarse/construir su representación política, porque hasta ahora es evidente que la sola radicalidad

¹⁹ La infeliz alusión de un ex presidente de la Sociedad Nacional de Industrias a la movilización indígena como una protesta de "cuatro sarnosos", es un anuncio del ánimo de algunos de ellos, así como de su carácter fuertemente racista y excluyente.

social, más aún cuando es fragmentada, se diluye y no logra cristalizarse en poder político.

Unas palabras sobre el factor García

En este marco, es claro que el pragmatismo de García, que se expresó una vez más en la designación de Yehude Simon como Premier, hace difícil imaginarse el futuro inmediato de este. Es claro que debió renunciar tras los sucesos de Bagua porque su responsabilidad política no admite discusión. Sin embargo, también es evidente que García lo seguirá necesitando por un tiempo más, así su tentación sea optar por la apuesta autoritaria, que es la congruente con su discurso del perro del hortelano y con el estilo confrontacional que mantuvo hasta su reciente mensaje televisivo.

El Premier es quien ha negociado con los pueblos amazónicos y con la población de Andahuaylas, demostrando una cierta capacidad para “jugar en pared” con distintas autoridades regionales, que lejos de censurar las protestas y movilizaciones, buscaron facilitar la solución. Ese es su capital en el cortísimo plazo, más allá de si consultó o no la derogatoria de las normas a las que ha comprometido al gobierno. Pero además, el Presidente está interesado en volver al gobierno el 2016 y nunca se ha agotado en su capacidad de sorprender, asunto que quita el sueño a sectores importantes de la alianza gobernante.

García es conciente que los deseos mayoritarios de la derecha política, buscan asegurarse el escenario electoral del 2011, cerrando más aún un sistema político que demuestra ya no dar más. Pero se da cuenta también, que aquella, tiene que ceder por la lógica de los hechos, que le dificultan en el plazo inmediato, restablecer el control siguiendo las reglas que vienen imponiendo las últimas dos décadas.

La gobernabilidad del país entra a un complicado período de prueba. Los ases bajo la manga del Presidente parecen ya agotados y su margen de maniobra para recomponer la situación a su favor, es definitivamente estrecho, en un escenario en el que deberá torear la falta de pericia para canalizar las demandas sociales, y los efectos negativos que ya viene generando la crisis financiera internacional. Lo que estará en juego es la propia democracia. ¿Le interesará?